

Joseba Azkarraga Rodero. Una aportación esencial a la memoria histórica y a la defensa de las víctimas del franquismo

Joseba Azkarraga Rodero. An essential contribution to historical memory and the defense of the victims of Francoism

María del Olmo Ibáñez

Archivo Histórico Provincial de Alicante

Resumen

Este artículo expone la aportación del político vasco Joseba Azkarraga en el ámbito de la memoria histórica y la defensa de las víctimas del franquismo. Realiza un recorrido por dos etapas de su biografía política: la etapa como parlamentario, 1979-1993, caracterizada por un posicionamiento rotundo en la denuncia y en la defensa de las víctimas, y con un importante contenido conceptual avanzado y la etapa como consejero del Gobierno vasco, con actuaciones precursoras en memoria y reparación a las víctimas, que en algunos casos no han tenido equivalente en el Estado español..

Palabras clave: Memoria histórica, Memoria democrática, víctimas del franquismo, País Vasco, Joseba Azkarraga Rodero.

Abstract

This article expose the contribution of the Basque politician Joseba Azkarraga in the field of Historical Memory and the defense of the victims of Franco's regime. He takes a tour of two stages of his political biography: the stage as a parliamentarian, 1979-1993, characterized by a resounding position in the denunciation and defense of the victims, and with an important advanced conceptual content and the stage as advisor to the Basque Government, with pioneering actions in memory and reparation to the victims, which in some cases have had no equivalent in the Spanish State.

Keywords: Historical memory, Democratic memory, victims of Francoism, Basque Country, Joseba Azkarraga Rodero.

«El 18 de julio de 2005 Amnistía Internacional hizo público el informe España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. Se defiende en él que los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón u olvido; que los derechos de las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos deben reconocerse. Y que es necesario poner fin a la doble injusticia que se produce cuando un Estado que viola derechos humanos priva a determinadas víctimas o a sus familiares del derecho a conocer la verdad y a obtener justicia y una reparación, siquiera sea moral, del daño sufrido.

[...] La llamada transición ejemplar se realizó sobre el ocultamiento de la represión ejercida por la dictadura franquista. La Memoria de las víctimas del franquismo constituía un factor incómodo y se les volvió a condenar al silencio y al olvido. De esta manera, la sociedad pensó que se enterraban las heridas de la Guerra Civil.

La obligación de saldar esta deuda pendiente de la transición democrática con las víctimas del franquismo, y las ideas por las que lucharon y fueron perseguidos, es un deber moral que los poderes públicos y toda la sociedad debemos asumir para recuperar del olvido injusto al que se han visto relegadas durante muchos años.

El reconocimiento institucional pretende también afirmar la superioridad, desde un punto de vista ético y político, de los valores, principios y objetivos que inspiraban la causa republicana en el ámbito vasco. Por ello, he querido comprometerme públicamente a que no se olvide jamás en nuestro Pueblo Vasco a todas y cada una de las víctimas inocentes, con sus nombres y apellidos, que padecieron la barbarie criminal del tota-

litarismo franquista. Ni mucho menos a que caiga en el olvido la causa por la que sufrieron y murieron, la causa de la libertad, de la democracia, de la justicia y de la humanidad. Es lo menos que podemos hacer»^[1].

Introducción

Vivimos tiempos extraños de revisionismo histórico y leyes llamadas de concordia, término manido y manipulado, que, en realidad, encubre las intenciones perversas de aquellos que quieren borrar de nuevo el pasado trágico de nuestra historia reciente. Un pasado repleto de víctimas, con las que nunca hemos sido capaces de hacer verdadera justicia aplicando, sencillamente, la legislación internacional sobre derechos humanos (DDHH) y crímenes de lesa humanidad.

Sucintamente, podemos traer a la memoria algunos hitos importantes en el ámbito de los DDHH. En 2005 la Comisión de DDHH de Naciones Unidas (ONU) publicó el «Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad». Estos recogen el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar:

«A. Principios generales

Principio 2. El derecho inalienable a la verdad.

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos

1.- Joseba Azkarraga Rodero, «Hernani en la memoria», *Prentsa Bulegoa*, 8 de noviembre de 2006, <https://www.euskoalkartasuna.eus/es/hernani-en-la-memoria/> (Consulta: 10 de abril de 2024).

crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.

Principio 3. El deber de recordar.

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas»^[2].

También es imprescindible recordar en esta introducción los «Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información», conocidos como «Principios de Tswane»:

«Principio 10: Categorías de información sobre las cuales existe una fuerte presunción o un interés preponderante a favor de su divulgación: A. Violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario. Existe un interés público preponderante en la divulgación de información sobre violaciones graves de los derechos humanos o violaciones serias del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de derecho internacional, y violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos a la libertad y seguridad personales. Dicha información no podrá ser cla-

sificada por razones de seguridad nacional bajo ninguna circunstancia»^[3].

Frente a los revisionistas y adalides de la concordia, sorprende también la postura de todos aquellos que hoy se rasgan las vestiduras y se lanzan a una cruzada en defensa de la llamada memoria democrática. Asombra esta actitud porque también oculta, en un ejercicio voluntario de desmemoria, que hay responsabilidades políticas claras en el incumplimiento de décadas del deber de memoria, justicia y reparación con las víctimas. La legislación de memoria histórica española ha sido de una tibieza injustificable, solo comprensible por el pacto de la modélica Transición española, que justamente se firmó utilizando la concordia como eslogan, para esconder el verdadero acuerdo de impunidad sobre la dictadura y la represión franquista. Lo explicó muy bien Aleida Assmann en su artículo «Recordar u olvidar: ¿De qué manera salir de una historia de violencia compartida?»:

«El proceso de olvido por decreto en España no logró generar un verdadero equilibrio. En vez de eso, en realidad estabilizó el poder de los franquistas y prolongó ese poder en la época democrática, a través de instituciones tales como la administración pública, las Fuerzas Armadas y el poder judicial. Esto se aplica en particular a las políticas de la historia en un país impregnado por monumentos y símbolos de la época de Franco, mientras que la experiencia histórica de los republicanos no encontró expresión pública. [...]El pacto de silencio no solo

2.- ONU, «Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», <https://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html> (Consultado: 9 de abril de 2024).

3.- Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, «Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información» (Principios de Tswane. Resolución 1954), 2013, https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Taller_Alto_Nivel_Paraguay_2018_documentos_referencia_Principios_Tshwane.pdf (Consultado: 9 de abril de 2024)

protegió a los criminales franquistas, también se extendió el estereotipo del enemigo de los comunistas y demócratas asesinados, que habían sido perseguidos por ‘antiespañolas’ y ‘rojos’. Las memorias de los republicanos, a quienes no se les concedió ningún lugar en la sociedad, fueron encapsuladas en contra memorias no oficiales y locales de grupos y familias marginadas»^[4].

En un rápido resumen sin pretensión de exhaustividad, las leyes más destacables, que han amparado esta impunidad, han sido, en primer lugar, la Ley de Secretos oficiales de 1968. Una ley franquista que, aunque ha habido proyecto reforma en todas las legislaturas, sigue vigente^[5]. Posteriormente, la Ley de Amnistía, también conocida como ley del olvido, consagró el modelo español de impunidad. Puede decirse que con ella se enterró la dictadura de Franco y se concedió un perdón colectivo a todos sus victimarios. Por el contrario, en el caso de América latina, por ejemplo, en Argentina se aprobaron leyes de Punto Final que, aunque después fueron derogadas, implicaron que muchos de los victimarios de las dictaduras militares han sido juzgados. Además, han existido las omisiones de la verdad. Estas constituyen el giro paradigmático del olvido a la memoria^[6].

En tercer lugar, Ley de Memoria histórica de 2007^[7]. Aunque generó debate y creó un clima de sensibilidad hacia el tema, en realidad su objetivo de «poner en valor la

Memoria y honrar a quienes a quienes sufrieron represión» no fue más allá de esa declaración. Su aplicación solo significó la concesión de subvenciones para exhumaciones de fosas y los cambios de nombre de calles. Asimismo, en cuarto lugar, la Ley de Memoria democrática de 2022^[8]. Ambas leyes tienen límites en plazos y excluyen a los victimarios. Así lo señaló, por ejemplo, Sabino Cuadra, en su artículo «El Modelo Español de impunidad» con el anteproyecto de ley y la ley omitió este tema en su texto definitivo:

«Hace falta también que junto al nombre de las víctimas aparezca también el de los victimarios de todos aquellos asesinatos, desapariciones, vejaciones, torturas.... Es preciso que, paralelamente a la realización de los mapas de lugares donde se utilizó el trabajo esclavo de los prisioneros de guerra, aparezcan también los nombres de las empresas que se beneficiaron de ello y el de sus propietarios. Es necesario asimismo que, además de hacer una auditoría de los bienes expoliados por el franquismo, se detalle la identidad de quienes se apropiaron de ellos»^[9].

Finalmente, el anteproyecto de ley de información clasificada. La ley no llegó a aprobarse en la legislatura anterior, con ella se pretendía derogar la ley de Secretos Oficiales. La información clasificada quedaba fuera del sistema de archivos y no contemplaba la legislación internacional sobre DDHH.

En esta coyuntura de ceremonia de la confusión, de amnesia interesada, es casi

4.- Aleida Assmann, «Recordar u olvidar: ¿De qué manera salir de una historia de violencia compartida?», *Aletheia*, 6 (2015).

5.- Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, Boletín Oficial del Estado (BOE), 6 de abril de 1968.

6.- Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, BOE, 17 de octubre de 1977.

7.- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, BOE, 27 de diciembre de 2007.

8.- Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, BOE, 20 de octubre de 2022.

9.- Sabino Cuadra, «El modelo español de impunidad», *Viento sur*, 20 de mayo de 2021, <https://vientosur.info/el-modelo-espanol-de-impunidad/> (Consultado: 9 de abril de 2024).

una obligación moral recuperar, históricamente, la aportación a la memoria histórica de este país y a la defensa de las víctimas del franquismo, del político vasco Joseba Azkarraga Rodero. Uno de los ejemplos políticos de máximo compromiso en este ámbito, afirmación que pretendo justificar documentalmente.

Unos datos biográficos sobre Joseba Azkarraga

Resulta relevante para el desarrollo de este artículo ofrecer unas pequeñas líneas biográficas sobre Joseba Azkarraga, que ayudan a explicar una parte importante de su compromiso ético con la memoria histórica.

Joseba Azkarraga Rodero nace en Salvatierra (Álava), el 15 de noviembre de 1950, en el seno de una familia con importantes vínculos con el PNV y muy represaliada por el franquismo. Su tío, Jose M^a Azkarraga Mozo, Lurgorri, fue fusilado en las tapias del cementerio de Derio el 16 de diciembre de 1937, con 21 años.

Su padre, Emiliano Azkarraga Mozo fue detenido junto a su hermano cuando el ejército vasco se vio obligado a capitular en agosto de 1937. Condenado también a muerte, le fue conmutada la pena, pero estuvo preso hasta 1943 y fue víctima de la represión franquista toda su vida^[10]. Los abuelos de Joseba Azkarraga fueron expedientados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y se les despojó de todos sus bienes^[11]. Joseba Azkarraga comenzó a militar en el PNV, en la clandestinidad, en 1967. Ha sido, por tanto, un político vasco durante gran parte de su vida. En 1979 fue

elegido diputado del PNV por Álava. Entre 1982 y 1986 fue senador por Vizcaya. Durante su etapa de senador tuvo un papel relevante en la reinserción y excarcelación de cerca de un centenar de presos pertenecientes a ETA, que se acogieron a la denominada vía Azkarraga.

En 1986 volvió a ser elegido diputado en las listas del PNV por Guipúzcoa, para pasar al Grupo Mixto en 1987, al producirse la escisión del PNV que dio origen al partido Eusko Alkartasuna (EA), formación por la que en 1989 fue reelegido diputado. Como miembro de EA formó parte del Gobierno Vasco, tripartito, presidido por Juan José Ibarretxe. Su primer cargo fue como consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y, posteriormente, fue Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, desde septiembre de 2001 hasta mayo de 2009. En la actualidad es portavoz de la Red Ciudadana Sare de apoyo a los derechos de los presos y presas vascas. La extensa trayectoria política de Joseba Azkarraga está atravesada por su lucha por la libertad, los derechos humanos, la paz y la convivencia.

La aportación de Joseba Azkarraga a la memoria histórica y a la defensa de las víctimas del franquismo

1978-1993

Después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Justicia recogen la existencia de 4265 fosas comunes en España. Están registradas ya 58.000 víctimas encontradas en dichas fosas, pero el cálculo aproximado del número de desaparecidos pendientes de localizar asciende a 114.000 personas. La apertura de fosas y las exhumaciones comenzaron en el año 2000 en España.

10.- Procedimientos militares contra José María y Emiliano Azkarraga Mozo, S-4292 y S-7558, Archivo Intermedio Militar Noroeste.

11.- Expediente de Responsabilidades Políticas de José M.^a Azkarraga Urmeneta y Juana Mozo Ocio, CDMH_RRPP_75, Centro Documental de la Memoria Histórica.

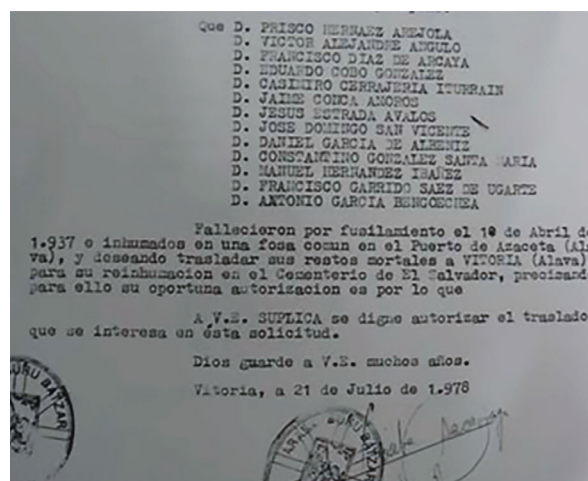
Sin embargo, en el caso de Euskadi, en 1978 fue abierta la fosa de Azazeta^[12]. El 31 de marzo de 1937 dieciséis presos políticos alaveses, encarcelados en la prisión provincial de Vitoria, situada en la calle La Paz, fueron asesinados en la localidad alavesa de Azazeta. Tres de ellos fueron exhumados a los dos días de la matanza, los demás cuerpos permanecieron enterrados en el monte hasta 1978. La petición de traslado y reinternación fue realizada al Gobernador Civil de Álava, el 21 de Julio de 1978, por Joseba Azkarraga, en nombre del Araba Buru Batzar, del que formaba parte^[13]. Azkarraga estuvo presente en la exhumación a petición de los familiares, concretamente, a petición de Jesús Estrada Arrondo, sobrino de una de las víctimas.

Desde 1979 hasta 1993, la etapa en la que Joseba Azkarraga estuvo en Madrid, en las Cortes Generales, hay que recordar que las iniciativas parlamentarias y la legislación a favor de las víctimas del franquismo fueron casi inexistentes^[14]. Eran los tiem-

12.- Así consta en el mapa de fosas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: «Fosa: 1540/2009 ALAV. Según un informe fechado en enero de 2004, los restos de una fosa localizada en el Puerto de Azazeta fueron exhumados en agosto de 1978, siendo depositados en el cementerio de San Salvador de Vitoria-Gasteiz (fóretro 114 manzana 132)», <https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=1540> (Consultado: 9 de abril de 2024).

13.- Composición Araba Buru Batzar en la primera Asamblea Nacional (1977) en Iruñea: Jon Urresti Uribe, Joseba Azkarraga Rodero, Francisco Ormazabal Zamakona, José B. Gerenabarrena Iriarte, Xabier Aguirre López, Fernando Castresana, Antonio Pérez Cuadrado, Miguel Ángel Estabillio Ferrer, Jesús M. Galarza, Ignacio M. Ortiz de Zárate, Ignacio M. Eguía y Juan Laburu.

14.- Las leyes que se aprobaron durante el gobierno de UCD, todas relacionadas con excombatientes de la Guerra Civil, son las siguientes: Real Decreto-ley 43/1978, de 21 de diciembre, por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la Guerra Civil Española, BOE, 22 de diciembre de 1978; Real Decreto-ley 46/1978, de 21 de diciembre, por el que se regulan las pensiones de mutilación de los militares profesionales no integrados en el Cuerpo de Caballeros Mu-



Fragmento de la petición oficial del traslado de los cuerpos de los fusilados al cementerio de El Salvador, firmado por Joseba Azkarraga.

pos de la supuesta modélica Transición y de la primera concordia, que las relegó al olvido y consagró la impunidad de los victimarios. En esos años Azkarraga estuvo trabajando principalmente en las comisiones de DDHH, Justicia e Interior, Defensor del Pueblo y Política Social y Empleo.

De las pocas cuestiones que se plantearon en sede parlamentaria relacionadas con el franquismo están dos importantes: En primer lugar, en 1988 el Grupo Mixto e Izquierda Unida presentaron una «Proposición de Ley de indemnización a personas que hayan sufrido prisión en supuestos contemplados en la Ley de Amnistía 15/10/77»^[15]. En la exposición de motivos de la propuesta el diputado, señor Espasa

tilados, BOE, 23 de diciembre de 1978; Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, BOE, 28 de septiembre de 1979; Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana, BOE, 10 de julio de 1980; y Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra, BOE, 3 de abril de 1982.

15.- Puede consultarse en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/DS/PL/PL_118.PDF (Consultado: 15 de abril de 2024).

Oliver, hacía referencia a las carencias de la ley 18/1984^[16] y añadía la posibilidad de «dar una satisfacción política, moral y democrática» a los ex presos políticos:

«Es por este doble motivo por lo que nosotros traemos hoy a debate esta proposición de ley. Si bien parte del principio no sólo del reconocimiento del derecho a una pensión sino del reconocimiento del derecho a una indemnización, en el terreno práctico lo que pretendemos, señoras y señores Diputados -y especialmente me dirijo ahora a los Diputados del Grupo Socialista-, es completar las insuficiencias prácticas, concretas, palpables, que se hayan podido detectar en la aplicación de la Ley 18/1984. Creemos que ésta podría ser una vía rápida y eficaz de resolver lo que aquella Ley preveía y, además, de dar una satisfacción política, moral y democrática que debemos, como representantes de todo el pueblo, a estos representantes a su vez, como expresos políticos, de todo un pueblo que supo luchar de diversas formas contra la dictadura, por la democracia y por las libertades. Estos son, señoras y señores Diputados, los dos elementos fundamentales de nuestra proposición de ley».

En su intervención, Joseba Azkarraga apoyó la propuesta y felicitó a los proponentes por su sensibilidad al plantearla, ya que la consideraba «llena de solidaridad y de justicia hacia unos hombres y mujeres que entregaron lo mejor en la lucha por la libertad y la democracia». Sobre la hoy tan discutida Ley de Amnistía de 1977, Azkarraga planteó entonces su incapacidad para remediar las tragedias de las víctimas del

franquismo y afirmó que la sociedad tenía una deuda pendiente con todas ellas. Sus palabras suponían un cuestionamiento de la ley bastante insólito en aquellos años:

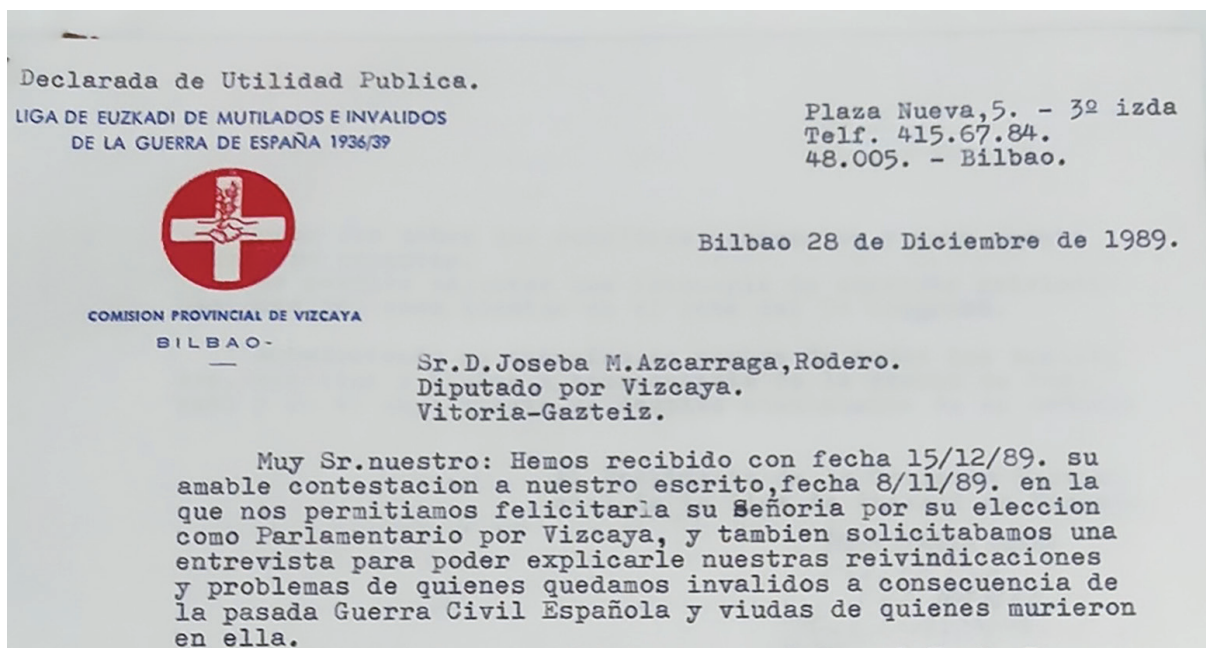
«La Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 si bien devolvió la libertad a los que todavía quedaban en prisión y supuso indudablemente el fin de un enfrentamiento en nuestro país, no fue capaz de solucionar tantas tragedias personales ni alcanzó a compensarles moralmente de tanto padecimiento. La Ley 18 de 1984, de 8 de junio, tampoco ha solucionado el problema. Por todo ello, yo quiero apoyar en nombre de Eusko Alkartasuna esta proposición de ley, entendiendo además que su aprobación, señorías, supondría al menos una satisfacción parcial de esa deuda pendiente que tenemos con ellos los que ahora formamos esta sociedad democrática y les compensaría, aunque sea a título simbólico porque no es tanto, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, lo que se pide- de todo aquello que supieron entregar con altruismo».

Este claro posicionamiento de Azkarraga se ve reflejado en su archivo personal por el gran número de cartas de afectados de distintos colectivos, que recibió, solicitándole su ayuda:

En segundo lugar, de 1991 es la «Proposición de Ley del Grupo parlamentario vasco (PNV), sobre devolución del Patrimonio de los Partidos y Asociaciones Políticas»^[17]. Sobre devolución patrimonial, previamente hay que recordar la intervención de Marcelino Camacho, diputado del PCE, en 1979, cuando el Estado se estaba repartiendo el ingente patrimonio del Sindicato Vertical franquista:

16.- Ley 18/1984, de 8 de junio, sobre reconocimiento como años trabajados a efectos de la Seguridad Social de los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, BOE, 12 de junio de 1984.

17.- Puede consultarse en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/PL/PL_135.PDF (Consultado: 9 de abril de 2024).



Carta de la Liga de Euskadi de mutilados e inválidos de la guerra de España 1936/39.
(Archivo personal Joseba Azkarraga).

«En resumen, el Grupo Parlamentario Comunista, plenamente solidario con esos trabajadores que se reunieron ayer en la Casa de Campo y que se reúnen hoy, de acuerdo con esta política que han manifestado también los compañeros del Grupo Socialista, estima que debe darse, en un plazo no superior a treinta días a partir de la aprobación de estos planteamientos, un inventario a las centrales sindicales representativas, y muy concretamente a Comisiones Obreras y a UGT; que en un plazo no superior a treinta días se constituya una Comisión mixta entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales representativas que acabo de citar, para establecer las formas de participación y control de los servicios de las entidades adscritas a la extinguida Organización Sindical; que por la función de interés social y de responsabilidad nacional que cumplen las centrales Sindicales, por el asesoramiento y servicios que prestan a los trabajadores, afiliados, por las dificultades que ha supuesto para su normal desarrollo el estar privadas de un patrimonio sindical, se proceda a es-

tablecer, de acuerdo con ellas, las formas lógicas de indemnizarlas, en el sentido de que puedan, de alguna manera, resarcirse de esos daños, de esos perjuicios; que los aproximadamente setecientos inmuebles, considerados como locales sindicales y asimilados, se pongan a disposición de las centrales para su inmediata utilización, en relación con el resultado de las elecciones sindicales de este país»^[18].

Joseba Azkarraga, ya en Eusko Alkartasuna, apoyó la Proposición de Ley del Grupo parlamentario vasco (PNV), sobre devolución del Patrimonio de los Partidos y Asociaciones Políticas. Habló de razones de legalidad y responsabilidad patrimonial del Estado. Es importante su mención sobre la responsabilidad patrimonial del Estado^[19], porque, a día de hoy, es una respon-

18.- Puede consultarse en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_015.PDF (Consultado: 22 de abril de 2024).

19.- La responsabilidad patrimonial del Estado fue consagrada en la Constitución, en su artículo 106.2: «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán

sabilidad que el Estado no ha asumido. Es preciso recordar que los bienes que fueron confiscados a los particulares por el Tribunal de Responsabilidades Políticas pasaron a manos de la administración de entonces y de particulares afines al régimen que se beneficiaron así de esta afinidad. Una investigación que tiene pendiente el Estado es la del destino de todos esos bienes e incluso la reclamación de su devolución a los particulares que los recibieron, como se ha hecho, por ejemplo, en Francia con los bienes incautados a los judíos^[20].

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, solo reconoce «el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura». El artículo 6 dice:

«Artículo 6. Declaración de reconocimiento y reparación personal.

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se refiere el artículo 3.1 y los efectos de las condenas y sanciones a que se refieren los artículos 4 y 5. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jurídico, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier admi-

nistración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional».

Resulta trágico e inmoral que, 31 años después de las palabras de Azkarraga en el Parlamento, en la página del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática, en el apartado sobre «Declaración de Reconocimiento y Reparación personal» se explique claramente que: «La Declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional»^[21]. Sigue sin contemplarse ninguna asunción de la responsabilidad patrimonial del Estado con las víctimas que fueron despojadas de todas sus pertenencias.

Planteó su desacuerdo con la falta de equiparación entre uno y otro bando que se había efectuado con el reconocimiento de las pensiones los militares de la República. Una cuestión importante, porque quienes defendían y defienden el hacer *tabula rasa* con respecto a la contienda española, suelen olvidar que el bando vencedor obtuvo compensaciones y gratificaciones durante cuarenta años. Hay que resaltar de su intervención que incluyó, por primera vez en las Cortes, la compensación de los ciudadanos, un colectivo que no estaba comprendido en la proposición, y habló de justicia y de la necesidad de que el Estado de Derecho acabara definitivamente con todas las consecuencias injustas del enfrentamiento.

«Consideramos, señorías, que existen dos razones diferentes, pero a la vez importantes y complementarias, por las que la

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

20.- «Francia aprueba ley para devolver a familias judías bienes robados por los nazis», RFI, 13 de julio de 2023, <https://www.rfi.fr/es/francia/20230713-francia-bienes-expoliados-nazi-historia-ley> (Consultado: 9 de abril de 2024).

21.- Puede consultarse en: <https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/ayudas-a-las-victimas/Paginas/declaracionreparacionyrec.aspx> (Consultado: 9 de abril de 2024).



Joseba Azkarraga en el estrado del Congreso 1992 (Foto de Povedano, Archivo del Congreso).

toma en consideración de esta iniciativa debería ser aprobada. Hay unas razones que podríamos denominar de legalidad. En primer lugar, la responsabilidad patrimonial del Estado entendemos, entendemos, señorías, que debe comprender a todas aquellas actuaciones en las que, al suprimirse su carácter de Estado de Derecho, se violen las libertades públicas y se confisquen los bienes de los ciudadanos, de los partidos y asociaciones políticas. Y no podemos ignorar, señorías, que esta fue una de las actuaciones del Estado en la época franquista.

En segundo lugar, esta responsabilidad patrimonial del Estado ha sido, en parte reconocida ya en esta época constitucional por el propio Estado democrático, que ha indemnizado daños como pueden ser los provenientes de las cárceles franquistas o el reconocimiento de las pensiones de los

militares de la República, aunque no podamos estar de acuerdo en la falta de equiparación que se ha hecho entre un bando y otro.

En tercer lugar, señorías, este mismo derecho de reversión de bienes confiscados ha sido reconocido también a las organizaciones sindicales, por lo que consideramos que, caso de que no se reconozca esta misma reversión de bienes a los partidos y asociaciones políticas, estaríamos violando el principio constitucional del artículo 14, es decir, el principio de igualdad. Hay otra razón, aparte de la legalidad que ya he comentado, que es tan importante como esa, que diría que es una razón de justicia. Cincuenta años después, señorías, de una absurda guerra, creemos que es hora ya de que el Estado de Derecho ponga fin a las consecuencias injustas de aquel enfrentamiento.

Por todo ello, señorías, insistimos en nuestro voto favorable a la toma en consideraciones de esta iniciativa parlamentaria»^[22].

En la introducción he comentado, que una de las leyes que garantizo la impunidad del franquismo fue la ley de Secretos Oficiales de 1968. La irretroactividad de las leyes es un principio establecido en la Constitución y en otras normas del ordenamiento jurídico, por tanto, la ley de Secretos Oficiales lo que encubría en el momento de la Transición fueron todos los crímenes, torturas violaciones de DDHH sucedidos a partir de 1968 por criminales de la dictadura, clasificados documentalmente como secreto, la violencia de la misma Transición. Su vigencia actual ha encubierto estos mismos supuestos hasta hoy. En cada legislatura se ha planteado su reforma, aunque nunca se ha llegado a realizar. Lo más cerca que hemos estado de despedirnos de dicha ha sido con el «Anteproyecto de Ley de Información Clasificada»^[23], una propuesta que básicamente no cambiaba nada, más allá de modernizar el título de la ley, que dejó en la estacada la convocatoria de elecciones el 23 de julio de 2023.

En la cuarta legislatura (1989-1993) se planteó la «Proposición no de Ley sobre secretos oficiales. 13/03/1990». Defiendo, después de haber revisado todos los intentos de reforma de la ley, que la intervención de Joseba Azkarraga, en el pleno donde se debatía esta proposición, contenía su propia propuesta a la ley de Secretos Oficiales y que esta ha sido la más completa de las que se han presentado en todas las legislaturas. Comenzaba declarando su voto favorable y

después exponía su posición partiendo del principio de transparencia «consustancial con los regímenes democráticos». Es fundamental este dato porque en este país la primera ley de transparencia es de 2013^[24].

«Nosotros creemos que es importante que se pueda debatir en esta Cámara este tema, por entender que el principio de transparencia es consustancial con los regímenes democráticos. Consideramos importante, por ello, modificar una legislación que en el tema de la materia de secretos oficiales es preconstitucional y no respeta el derecho de los ciudadanos en general, ni de los parlamentarios en particular, a conocer y tener acceso a la información sobre la actividad de la Administración».

Azkarraga admitía la existencia de asuntos que pudieran ser considerados como materia reservada, pero dejaba claro que existían unos límites, bien fijados en el artículo 105 del texto constitucional: «será materia reservada aquello que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos o a la intimidad de las personas». Atendiendo a la claridad de los límites, declaraba con rotundidad su oposición a cualquier otra prohibición sobre información:

«Nos vamos a oponer a cualquier otra limitación o al hecho de que pueda ser suficiente que el Gobierno, o en su caso el Estado Mayor, declare que una información es secreta o reservada para negar toda noticia sobre ella. Creemos que es urgente y aplaudimos que pueda debatirse en esta Cámara una ley reguladora de los mecanismos de control necesarios para evitar que, al socai-

22.- Fragmento de la intervención de Joseba Azkarraga el 8 de octubre de 1991, *Boletín de las Cortes*, 135, p. 6485.

23.- Puede consultarse en: <https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/Documents/APL%20Informacio%CC%81n%20Clasificada.pdf> (Consultado: 15 de abril de 2024).

24.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, BOE, 10 de diciembre de 2014. A esta ley estatal después le han seguido las de las comunidades autónomas.

re de un pretendido secreto oficial, se siga negando información a quienes tenemos constitucionalmente derecho a ella».

Por último y lo más importante, es que todos los proyectos de reforma hasta la fecha se han centrado en la cuestión de los plazos de consultabilidad de la documentación clasificada. Azkarraga, cambió los términos. Él puso el acento en el control a la hora de declarar un asunto secreto oficial. Defendió que no fuera competencia exclusiva del ejecutivo la clasificación de documentos, ya que esto abría la puerta a la impunidad de los gobiernos sobre sus propias acciones delictivas. Pedía la intervención del poder legislativo como parte de las atribuciones y derechos de los parlamentarios y el control de los tribunales.

«No podemos olvidar, como decía anteriormente, que el principio de la transparencia en los asuntos y cuestiones oficiales es un principio democrático, y este principio de transparencia debe de jugar con mayor rigor aun cuando se trata de hacer efectivo el derecho de los parlamentarios a controlar la acción del Gobierno, control parlamentario que, por otro lado, es consustancial, señorías, con el Estado democrático y que constituye la esencia del régimen parlamentario. El control parlamentario supone, pues, el único medio y la técnica jurídico-constitucional para que los ciudadanos, que en definitiva son los titulares de la soberanía popular, controlen a sus gobernantes. Por todo ello, señorías, nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a esta iniciativa parlamentaria, con la esperanza no solo de que pueda ser aprobada en estos momentos, como parece ser que va a ocurrir, sino también con la esperanza de que algún día esta Cámara, señorías, pueda clarificar también otro tipo de secretos, otro tipo de reservas, como, por ejemplo, son los

denominados fondos reservados, a fin de que también esta Cámara pueda conocer su utilización, su uso o su abuso»^[25].

2001-2009 Consejero de Justicia del Gobierno Vasco

El estudio de este periodo de la biografía política de Joseba Azkarraga nos permite observar con nitidez un hecho notable. Con respecto al tema de este artículo, la memoria histórica y la defensa de las víctimas del franquismo, (pero extrapolable a otros múltiples asuntos), en su etapa en las Cortes Generales, como miembro del grupo parlamentario del PNV o del Grupo Mixto en representación de EA, Azkarraga, como hemos visto, realizó una continua y rotunda declaración de principios, una exposición rigurosa de sus planteamientos y un permanente ejercicio testimonial y de compromiso. Sin embargo, como puede comprenderse, las posibilidades de acciones ejecutivas fueron nulas. Es clarísimo y comprobaremos que, con su participación en el gobierno vasco, como miembro del ejecutivo, Joseba Azkarraga va a tratar de hacer realidad todos esos principios y planteamientos.

Si comenzamos por la legislación vinculada al departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, del que era consejero Azkarraga, podemos destacar las siguientes disposiciones. Primero, el decreto 280/2002, de 19 de noviembre, «sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la ley de amnistía»^[26]. Como su título indica con

25.- Fragmento de la intervención de Joseba Azkarraga el 13 de marzo de 1990 para la «Proposición no de Ley sobre secretos oficiales», *Boletín de las Cortes*.

26.- Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la ley de amnistía, *Boletín Oficial del País Vasco*.

claridad, este decreto guarda relación con la «Proposición de Ley de indemnización a personas que hayan sufrido prisión en su puestos contemplados en la Ley de Amnistía 15/10/77», de la que hemos hablado en el anterior apartado con relación a la intervención de Joseba Azkarraga. Es bien significativo que lo que el decreto pretendía era compensar a los vascos, que no pudieron ser indemnizados en aquel momento:

«El Gobierno Vasco, aunque entiende que ninguna indemnización puede devolver a las personas afectadas y a sus familiares lo que perdieron con motivo de la represión y la reclusión que sufrieron en su lucha por las libertades, cree que es de justicia poder compensar a aquellos/as ciudadanos/as vascos/as que no pudieron acogerse a las indemnizaciones reguladas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992, y en la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social»

La segunda es la creación el 12 de diciembre de 2002 de una «comisión interdepartamental para investigar y localizar las fosas de las personas desaparecidas durante la guerra civil». Su objetivo era coordinar la labor de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco^[27]. La comisión estaba presidida por el director de DDHH del Gobierno Vasco, adscrito al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, de Joseba Azkarraga. Hay que recordar que en el 2002 gobernaba José M.^a Aznar y no hubo ninguna financiación estatal para apertura de fosas comunes.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, firmó varios convenios con la sociedad

de Ciencias Aranzadi para la apertura de fosas de desaparecidos, a partir de la fecha de creación de la Comisión Interdepartamental y desde 2003. Así lo explicaba en su comparecencia ante la Comisión de DDHH, en 2005:

«Esta Dirección continuará comprometida con la Recuperación de la Memoria Histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. Con ese fin nos proponemos finalizar los trabajos que durante estos dos últimos años se han desarrollado a través de un Convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Con ese fin nos proponemos finalizar los trabajos que durante estos dos últimos años se han desarrollado a través de un Convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi»^[28].

El tercero es el «convenio de colaboración entre el gobierno vasco y la sociedad de ciencias aranzadi para continuar la investigación de personas desaparecidas durante la guerra civil en el territorio de la comunidad autónoma del país vasco» de 26 de septiembre de 2006^[29].

En España la apertura de fosas ha sido posible gracias a la intensa labor de las asociaciones memorialistas y, sobre todo, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), como indica Elisenda Calvet en «¿Qué ocurre con las más de 4000 fosas comunes que hay en España?»,

28.- Comparecencia del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ante la Comisión de DDHH y Solicitudes ciudadanas para presentar los planes de trabajo de la nueva Legislatura, 29 de septiembre de 2005, <https://www.euskoalkartasuna.eus/es/comparecencia-del-consejero-de-justicia-empleo-y-seguridad-social2/> (Consultado: 9 de abril de 2024).

29.- Puede consultarse en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/oroimen_historikoa/es_convenio/adjuntos/Convenio_Aranzadi.pdf (Consultado: 22 de abril de 2024).

27.- Al respecto: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/actuaciones_realizadas/es_antgob/adjuntos/comision_interdepartamental.pdf (Consultado: 9 de abril de 2024).

«El miedo de los familiares hizo que las víctimas de la represión franquista no empezaran a ser exhumadas hasta bien entrada la democracia, siendo el punto de inflexión la apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo en el 2000. A raíz de esta actuación se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que daría lugar al inicio de un proceso asociativo en torno a la Memoria. Desde entonces, la recuperación de los restos de las personas desaparecidas ha quedado principalmente en manos de los familiares de las víctimas, que han tenido que recurrir a las subvenciones del Estado (suspendidas entre 2011 y 2021) para realizar los trabajos de exhumación contando con la participación voluntaria de antropólogos y expertos»^[30].

Me detengo en el convenio correspondiente a 2006 porque señalaba que estaría vigente hasta 2010. Este Convenio entrará en vigor el día de su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Por tanto, desde 2003, hasta el final del mandato de Azkarraga como consejero a mediados de 2009, su departamento estuvo trabajando en la localización y apertura de fosas, y en la investigación sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Apuntaba también que, desde el convenio de 2005 hasta la fecha de la firma de este, se habían localizado «69 fosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ofreciendo información sobre personas desaparecidas y fusiladas a quienes han solicitado la misma, y ha realizado 176 grabaciones de testimonios fosas y exhumaciones».

30.- Elisenda Calvet Martínez, «¿Qué ocurre con las más de 4 000 fosas comunes que hay en España?». *The Conversation*, 2021. No sería hasta el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y, sobre todo, tras la Ley 52/2007 de Memoria histórica, cuando se abrieron 429 fosas del franquismo financiadas en parte con dinero público.

A raíz de la ley 20/2022 de Memoria democrática se ha empezado a oír hablar con más frecuencia del trabajo forzado de los presos republicanos, de los esclavos de Franco, e incluso se ha llevado su causa ante los tribunales^[31]. Es así porque la ley les dedica el artículo 32:

«Artículo 32. Trabajos forzados.

1. La Administración General del Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido, así como impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a través de la realización de un censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese sentido.

2. La Administración General del Estado, en colaboración con las demás administraciones públicas, confeccionará un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas».

Han tenido que transcurrir 83 años para que los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores tengan este reconocimiento por parte de la Administración General del Estado.

El departamento de Joseba Azkarraga fue pionero en legislar sobre compensación

31.- Guillermo Martínez, «El trabajo forzado de presos republicanos durante el franquismo llega a los tribunales», *El Salto*, 20 de octubre de 2023, <https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/trabajo-forzado-presos-republicanos-durante-franquismo-llega-tribunales> (Consultado: 20 de abril de 2024).

económica para los integrantes de los Batallones Disciplinarios de Soldados trabajadores con el decreto de 14 de febrero de 2006:

«por el que se establecen disposiciones para compensar económicamente a las personas privadas de libertad, incluida la padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las mismas condiciones y requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía, salvo las modificaciones de procedimiento previstas en la presente norma»^[32].

Este decreto pretendía acoger a todas las solicitudes que se quedaron fuera de plazo del decreto 280/2002, de 19 de noviembre, «sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la ley de Amnistía». Sin embargo, explica también que, además, quiere admitir las solicitudes presentadas por los trabajadores forzoso de los batallones disciplinarios:

«Esta actuación se simultaneará con la revisión de los expedientes que fueron presentados en plazo a la convocatoria efectuada por el citado Decreto, con la finalidad de considerar el período transcurrido en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores como de privación de libertad efectiva computable a efectos de su compensación. En la tramitación de solicitudes presentadas al amparo de la presente norma, también se considerará como privación de libertad efectiva el tiempo transcurrido en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores».

32.- Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, «sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la ley de Amnistía», Boletín Oficial del País Vasco.

En 2007 se promulgó la famosa ley de Memoria histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que generó mucha controversia por su tibieza y cuyos efectos reales ya he comentado: subvenciones para exhumaciones y cambios de nombre de calles. Las declaraciones de Joseba Azkarraga sobre dicha ley fueron muy críticas, hizo hincapié, en reiteradas manifestaciones públicas, en la necesidad del conocimiento de los victimarios, como veremos un poco más adelante. La prensa recogió sus manifestaciones en las que afirmaba que EA iba a pedir la reforma de dicha ley incluyendo la compensación económica a las víctimas, la devolución de los bienes incautados y la anulación de los juicios franquistas, entre otros aspectos importantes, como la apertura de los archivos:

«Por ello el consejero anunció que EA pedirá en el Congreso español ‘que se reforme la Ley de Memoria Histórica’ ‘cuya neutralidad persigue blanquear conciencias’ para ‘lograr una compensación económica proporcional para los afectados, restituirlos bienes incautados y anular los juicios franquistas, así como retirar los símbolos del régimen dictatorial y permitir el libre acceso a los archivos históricos y militares para poder conocer la verdad de los ocurrido’»^[33].

Es muy importante recordar que toda la legislación española de memoria que ha producido el Estado español a lo largo de la democracia no ha permitido el juicio de los victimarios, dando lugar a la búsqueda de justicia en el extranjero por parte de las víctimas. Es el caso de la Querrela argentina. Así lo explica Rafael Escudero en su artículo «Memoria histórica e imperio de

33.- Fragmento de las declaraciones del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, sobre Ley de Memoria histórica, recogidas en varios medios de comunicación en 2008.

la ley: el poder judicial ante el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo»:

«La insatisfacción provocada por el contenido de la ley de memoria histórica, sumada a la negativa del Tribunal Supremo a investigar los crímenes del franquismo, motivó que víctimas y asociaciones buscaran la satisfacción de su derecho a la justicia más allá del foro judicial español. En concreto, recurrieron a la justicia argentina sobre la base del principio de justicia universal, al encontrarse este recogido en su ordenamiento jurídico. Nacido como un instrumento de lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, este principio supone la posibilidad de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad en un Estado distinto a aquel en el que se cometieron los hechos o del que son nacionales bien las víctimas bien los victimarios. Sobre esta base normativa, en 2011 la justicia argentina (en concreto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1) admitió la demanda presentada por genocidio y/o crímenes contra la humanidad contra dirigentes franquistas relacionados con homicidios, torturas y privaciones ilegales de libertad durante la dictadura. Estos son los presupuestos de la ‘querrela argentina’»^[34].

El asunto de los juicios franquistas que planteaba Azkarraga lo ha recogido ahora la ley 20/2022 en su artículo 5:

«Declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos y nulidad de sus resoluciones. 1. Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a

partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones».

Por último, hay que añadir que su consjería fue la primera de todas las CC.AA en llevar a efecto la recopilación documental y la creación de una base de datos con 8650 fusilados en Euskadi 1936-1942. Joseba Azkarraga dio a conocer los resultados de esta investigación con una rueda de prensa.

«El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha explicado hoy en rueda de prensa que su Departamento podrá a disposición de Garzón estos datos, en respuesta a la providencia en la que el magistrado pide a diferentes instituciones que den datos acerca de muertos y desaparecidos en esa contienda (1936-39) y en la represión de la dictadura franquista (1939-75).

El Gobierno Vasco tiene la documentación preparada, pero ha pedido al juez que le solicite por escrito que se la remita, para cumplir la ley de protección de datos.

Azkarraga ha explicado que el Gobierno de Vitoria cuenta con información sobre esta materia gracias al convenio de colaboración firmado en el 2003 con la Sociedad Aranzadi, que ha dado como resultado la apertura de nueve fosas y la localización de más, que no se han abierto por no haber solicitud de las familias.

En total, el Departamento cuenta con un listado de 8.650 casos de fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra»^[35].

34.- Rafael Escudero Alday, «Memoria histórica e imperio de la ley: el poder judicial ante el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo», *Derechos y libertades*, 38 (2018), pp. 73-105.

35.- «El Gobierno vasco contabiliza 8.650 fusilados y fallecidos en Euskadi en la Guerra Civil». *El Diario Vasco*, 24 de septiembre de 2008, <https://www.diariovasco.com/20080924/mas-actualidad/sociedad/gobierno-vasco/>

Afirmó también que era necesario que «se individualicen las responsabilidades», porque los fusilamientos y desapariciones «fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles». Señalaba Azkarraga la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad recogida en la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad» de la ONU^[36]. Entonces defendió la necesidad de nombrar a los victimarios y que asumieran su responsabilidad. Azkarraga exigió «que se haga luz, que los que deben cargar con la mancha de haber cometido crímenes de lesa humanidad carguen, y que todo ello tenga el benéfico efecto de poner a cada uno en su lugar, más allá del mito oficial, mantenido y alimentado desde la Transición en el Estado de que ambos bandos son culpables». El consejero apostó por «conocer la verdad» como primer paso para «progresar en el trinomio consolidado internacionalmente de verdad, justicia y reparación» con el objetivo de «legar a las generaciones futuras unas bases de convivencia libres del miedo, con una mirada limpia y sin complejos al pasado, como garantía de edificación de una sociedad libre y verdaderamente democrática»^[37].

De ellos, de los victimarios, se ha empezado a hablar tímidamente después de la ley de Memoria Democrática 22/2022. Hay que añadir, que la producción historiográfica y académica sobre los perpetradores co-

mienza a aparecer con fuerza en los últimos tiempos, también por influjo europeo. Lo que Sánchez León llama el «giro victimario» señalando como año clave el 2017:

«2017 seguramente pasará a la historia de la historiografía como el año de la puesta de largo de lo que se conoce ya como el ‘giro’ victimario. El fenómeno tiene de momento por epicentro una red de investigadores coordinada desde la Universidad de Utrecht cuya página web centraliza proyectos, conferencias y publicaciones, además de vínculos con otras actividades relacionadas con los Genocide Studies»^[38].

Para una aproximación general al estado de la investigación referida a los victimarios, es muy interesante el artículo de Pericet Caro «Estado de la cuestión sobre los victimarios franquistas en la cultura española del cambio al siglo XXI». En las conclusiones subraya lo que puede aportar esta línea de estudio:

«El estudio de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que, como hemos explicado, se trata de una perspectiva renovadora, permite realizar un conjunto de preguntas y plantear una serie de problemas que actualizan los debates teóricos sobre la violencia política desde un prisma global (Ros Ferrer, 2019: 159). Efectivamente, tratar de comprender, descubrir y analizar quiénes fueron los encargados directos y los responsables intelectuales de perpetrar crímenes masivos, cómo y por qué operaron, en qué coyunturas y ámbitos desempeñaron sus tareas represivas, qué fronteras podemos trazar entre víctimas, victimarios, delatores,

co-contabiliza-fusilados-200809241355.html (Consultado: 15 de abril de 2024).

36.- La convención data de 26 de noviembre de 1968. Véase: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes> (Consultado: 15 de abril de 2024).

37.- «Los 8.650 nombres El Gobierno Vasco dio a conocer ayer un listado de casos de fusilados y fallecidos durante la Guerra Civil y el franquismo en la Comunidad Autónoma», *El Diario Vasco*, 25 de septiembre de 2008, <https://www.diariavasco.com/20080925/politica/nombres-20080925.html> (Consultado: 10 de noviembre de 2024).

38.- Pablo Sánchez León, «‘Esa tranquilidad terrible’. La identidad del perpetrador en el ‘giro’ victimario». *Memoria y Narración. Revista de estudios sobre el pasado conflictivo de sociedades y culturas contemporáneas*, 1 (2018), pp. 167-183.

verdugos, etc., entre otros objetivos, completan los relatos y el conocimiento sobre los procesos traumáticos del pasado, que se habían centrado excesivamente en la figura de las víctimas. Esta línea de investigación de estudio de «los verdugos, los promotores y los espectadores» de la represión franquista está, por lo tanto, más por explorar y promete unos resultados muy alentadores y positivos para el caso del estudio de la represión franquista»^[39].

El Departamento de Justicia de Joseba Azkarraga firmó convenios de colaboración en materia de Memoria histórica con diversas localidades del País Vasco, entre ellas Hernani. Entre finales de setiembre y comienzos de noviembre de 1936, 200 personas fueron fusiladas en Hernani por las tropas franquistas. Hernani tiene una de las fosas comunes más grandes de Euskadi. La Sociedad Científica Aranzadi logró identificar a 116 de ellas. El monumento memorial en el cementerio, que llevó a cabo el Gobierno vasco en 2006, fue una de las actuaciones del «Programa Hernani 1936» entre el Gobierno Vasco, la Diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de Hernani.

América Latina

Joseba Azkarraga ha defendido la Memoria histórica y a las víctimas de crímenes de lesa humanidad más allá de nuestras fronteras y en momentos muy difíciles de América Latina. Es miembro de Amnistía Internacional desde 1980. En el año 1981, respondiendo a una petición de Azkarraga, la organización le trasladaba el listado de

desaparecidos españoles en la dictadura militar Argentina.

En 1986 participo en la «76 Conferencia de la Unión Interparlamentaria» en Buenos Aires, en plena dictadura de Pinochet. El documento de su intervención, con su denuncia de la dictadura y de las terribles vulneraciones de DDHH que se estaban produciendo, merece ser reproducido:

«Sr. Presidente, sres. y sras. parlamentarios. Si en algo creo que podríamos coincidir todos los que hemos participados en esta 76 Asamblea Interparlamentaria es en que los discursos pronunciados en el transcurso de estos días no pueden quedar en la simple retórica, sino que deben obligarnos a alinearnos al lado de los que defienden la vida frente a la muerte; los derechos humanos frente a la tortura o el racismo, y la paz frente a la guerra. En este punto que nos permite exponer diversos temas, deseo referirme, en estos minutos que me corresponden, una vez más al drama del pueblo chileno. Pueblo que sigue soportando y luchando contra una feroz dictadura que arrebató el poder hace ya 13 años. Sres. parlamentarios, el régimen de Pinochet es producto de la violencia; producto de la intransigencia y el terror. El Régimen que comenzó asesinando al presidente constitucional Salvador Allende y a centenares de chilenos el mismo día 11 de septiembre de 1973 y que 13 años después continua su absurdo baño de sangre.

Amigos parlamentarios, la tortura y el crimen continua hoy siendo la práctica cotidiana en Chile. Sigue siendo la contestación del régimen de Pinochet a cada paro, jornada de protesta de los trabajadores, de los estudiantes o de las heroicas mujeres chilenas. La dictadura no tiene otra respuesta a las ansias de libertad del pueblo chileno que más represión.

Esta situación insostenible ha sumido en

39.- Adrián Pericet Caro, «Estado de la cuestión sobre los victimarios franquistas en la cultura española del cambio al siglo XXI», *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, 26 (2023), pp. 308-331.

la angustia y la desesperanza a millones de chilenos y ello debe obligarnos a esta 76 Conferencia Interparlamentaria a apostar sin ambigüedades por la democracia y la libertad de Chile.

Señores parlamentarios, los demócratas chilenos dicen algo en lo cual coincidimos plenamente y es que el problema chileno no es como lo plantea Pinochet, el dilema no es dictadura o caos; el dilema es dictadura o democracia.

Queremos manifestar también nuestra preocupación por lo que consideramos actuación poco clara del Pentágono, que con su posición abierta en ocasiones y encubierta en otras, ha intentado impedir el curso unitario en la creación de la Asamblea de la Civilidad, el organismo más amplio de la oposición chilena.

Chile necesita el apoyo y respaldo de todos los demócratas del mundo para terminar con una situación insostenible. La dictadura ha vuelto a implantar un nuevo estado de sitio; ha recrudecido la represión, ha asesinado a demócratas como el periodista José Carrasco, estremeciendo de esta forma la indignación de Chile Y del mundo; se siguen aplicando medidas coercitivas contra la libertad de prensa, de asociación, se siguen deteniendo a miles de personas, en definitiva, se crea un clima de terror intentando aterrorizar a la población chilena. Pero estamos convencidos de que ni el terror ni el estado de sitio conseguirán hacer retroceder al pueblo chileno que lucha por su libertad.

Nuestra delegación respalda ilusionada las voces generalizadas del pueblo chileno exigiendo el retorno de la democracia y la libertad.

Exigimos que puedan vivir en la Patria que los vio nacer los 55 parlamentarios que la dictadura impide por medio de leyes de excepción regresar a su país.

Exigimos que finalice el estado de sitio y

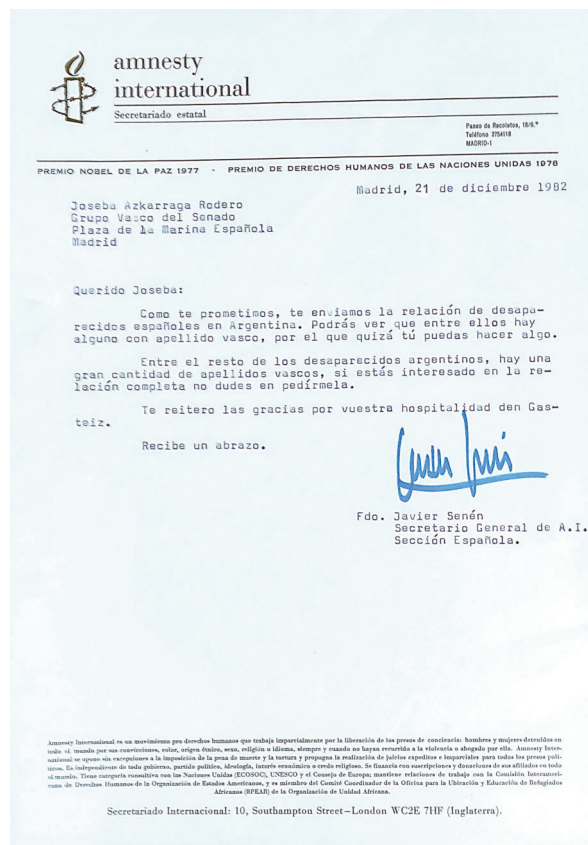


Imagen 4. Carta Amnistía Internacional, 1982 (Archivo personal Joseba Azkarraga).

la violación sistemática de los derechos humanos en Chile y se den los pasos decisivos hacia la transición a la democracia. Nuestra delegación extiende su solidaridad con todos los hombres del mundo que luchan por su libertad; y hoy en Argentina lo hacemos especialmente para que los hombres y las mujeres chilenos que son detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados por luchar por algo tan preciado como es la libertad, ojalá en ellos se haga realidad la profecía de su presidente Salvador Allende de que muy pronto para los chilenos se abran las avenidas de la libertad.

Compañeros parlamentarios del mundo, colaboremos para que una nueva dictadura sea eliminada para siempre de esta tierra americana»^[40].

40.- Intervención de Joseba Azkarraga en la 76 Conferen-

En 1990 Joseba Azkarraga formó parte de la Comisión del Parlamento español para el seguimiento de la matanza de los seis jesuitas y compañeras en El Salvador. Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo; el jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y su hija Celina Mariceth Ramos. Fueron asesinados por un pelotón del batallón Atlacatl del ejército de El Salvador, bajo las órdenes del coronel Benavides, durante la presidencia de Alfredo Félix Cristiani. Joseba Azkarraga viajó a El Salvador con la comisión, allí se entrevistaron con testigos y autoridades. Desde el primer momento, denunció públicamente la participación de EEUU en la matanza, la retención de los testigos y la impunidad de los responsables del ejército salvadoreño.

Al día siguiente de su llegada a El Salvador, envió un artículo a *El Mundo* titulado «El Salvador. Asignatura pendiente». Reproduzco un fragmento, que muestra bien la denuncia de Azkarraga:

«En las entrevistas que hemos mantenido hasta el momento con diversos representantes de la sociedad salvadoreña, hemos percibido con claridad que desde el asesinato de monseñor Romero nadie había hablado con tanta claridad como el P, Ellacuría. Nadie había defendido tanto al pueblo salvadoreño como él. Y esta fue la cruel razón de estos asesinatos. Asesinatos que no basta justificarlos con la detención del ‘incauto soldadito’ que recibe órdenes para cometer esta atrocidad, sino con la necesaria puesta a disposición de la justicia de quienes son denominados en El Salvador como los

autores intelectuales de estos asesinatos. Aquellos que, desde los centros de poder de El Salvador, que aún siguen siendo las Fuerzas Armadas, idearon, planificaron y dieron la orden de intervención en aquella fatídica noche de hoy hace un año».

También denunció la pasividad y falta de cooperación en el esclarecimiento de los hechos por parte del Gobierno español. Las preguntas que planteó al ejecutivo en el Congreso, el 6 de abril de 1993, al conocerse la promulgación de la Ley de Amnistía^[41], ni siquiera fueron respondidas:

«A la Mesa del Congreso de los Diputados Joseba Azkarraga Rodero, Diputado de Euzko Alkartasuna, e integrado en el Grupo Mixto del Congreso, al amparo del artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula al Excmo. Sr. Ministro de AA EE las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta por escrito. Justificación El denominado informe de «La Comisión de la verdad» elaborado por la ONU, ha concluido afirmando que la decisión de asesinar a cinco jesuitas, su asistente y la hija de ésta, fue tomada en una reunión de altos oficiales a la que asistieron, entre otros, el Ministro de Defensa salvadoreño René Emilio Ponce y el entonces jefe de la Fuerza Aérea, General Rafael Bustillo. Desde EA y EUE, aun entendiendo que es necesaria la reconciliación en el pueblo salvadoreño, consideramos que, para humanizar la sociedad, es necesario que ciertos hechos, como estos asesinatos, no puedan cometerse impunemente. Por esta razón, preguntamos al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: 1P ¿Es intención del Gobierno español, elevar su protesta ante el Gobierno salvadoreño, por la implicación del Ministro de Defensa René Emilio Ponce

cia de la Unión Interparlamentaria, Buenos Aires, 1986. Archivo personal Joseba Azkarraga.

41.- Nos referimos a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, El Salvador, 20 de marzo de 1993.

en la decisión en la comisión de estos asesinatos? ¿Es intención, asimismo, del Gobierno español, de elevar su protesta ante las autoridades salvadoreñas, por la amnistía promulgada? 2P Madrid, 23 de marzo de 1993. —Joseba Azkarraga Rodero»^[42].

Como Consejero de Justicia, firmó convenios de colaboración en materia de memoria histórica con varios países de América Latina, entre ellos, Chile y Argentina, países muy castigados por sus respectivas dictaduras. En 2008 firmó el «Convenio de colaboración con la Corporación Parque por la Paz de Villa Grimaldi», uno de los principales centros de tortura y exterminio de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) entre 1973 y 1978.

En cuanto a las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, el Departamento de Joseba Azkarraga firmó con ellas un «Convenio de colaboración con el fin de impulsar actividades conjuntas en materia de información, capacitación y difusión de la cultura de los DDHH». En 2006 se les entregó el Premio Rene Cassin, que fue recogido por Estela Barnes de Carlotto, presidenta y Rosa Tarlowsky, vicepresidenta. El Premio de Derechos Humanos René Cassin fue creado por el gobierno vasco del lehendakari Ibarretxe, en 2003. Es un premio promovido por el departamento de Justicia de dicho gobierno, con el fin de reconocer la actuación y trayectoria personal o profesional de personas y entidades en la promoción de los derechos humanos^[43].

Azkarraga participó en seminarios de las Abuelas de la Plaza de Mayo y prologó la

publicación de las actas de ambos. El prólogo lo tituló «Cuando importa la verdad» y este fragmento del texto, que selecciono, es bastante revelador de la conciencia y compromiso de Joseba Azkarraga con la Memoria histórica y la defensa de las víctimas de graves vulneraciones los DDHH.

«Las abuelas han enseñado que no puede haber olvido ni amnesia. Solo la verdad y la memoria permiten hacer sitio a la justicia y de ahí. La universal contribución que han realizado a la causa de los Derechos Humanos. Porque si bien es cierto que el primer paso de su compromiso lo dieron movidas por el intenso amor hacia sus hijos, la tarea se hizo después enorme y global en defensa de los derechos de todos los seres humanos.

Lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos humanos surgió como reacción ante la enorme tragedia colectiva que vivió con la II Guerra Mundial, el movimiento generado por las Abuelas de Plaza de Mayo nos emplazaba a todos los que creemos en los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Por eso no dudé nunca a la hora de que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, al que represento, pudiera contribuir en la celebración del seminario que nos congregó en abril de 2008 para pensar juntos sobre las consecuencias de lo que fue una cruel y sistemática vulneración de los derechos más básicos por parte de la dictadura militar, instaurada en Argentina con el golpe de 1976»^[44].

42.– *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, 402, 6 de abril de 1993, p. 52.

43.– En el año 2008 le fue entregado al premio nobel de la paz a Desmond Tutu. Meses antes el lehendakari Ibarretxe y Joseba Azkarraga se encontraron con él en Sudáfrica en un viaje con el objetivo de conocer el proceso de paz de este país tan castigado.

44.– Joseba Azkarraga Rodero, «Cuando importa la verdad», en Alicia Lo Giúdice. *Psicoanálisis: Identidad y Transmisión. Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo*, Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo-Gobierno Vasco, 2007.

Considero que este recorrido por la biografía política de Joseba Azkarraga desde 1978 hasta 2009, como parlamentario de las Cortes Generales y como consejero de Justicia del Gobierno vasco refleja bien lo que ha sido una conciencia clara y una voluntad rotunda en la defensa de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo. Son importantes determinadas aportaciones suyas des-

de el punto de vista conceptual en este ámbito, que se adelantaron a la legislación que muy posteriormente las ha recogido. Como también pienso que es de justicia reconocer que, cuando tuvo capacidad ejecutiva, llevó a cabo acciones que del mismo modo precedieron a las actuaciones de los gobiernos del Estado y, que, en algunos casos, siguen sin acometerse por dichos gobiernos.